

Con fecha 16 de febrero de 2015 tuvo entrada en la Unidad de Información de Transparencia del Ministerio de Presidencia-Presidencia del Gobierno, solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, solicitud de [REDACTED] que quedó registrada con el número 001240:

“Estimado Ministerio de la Presidencia - Presidencia del Gobierno: En virtud de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, les solicito la siguiente información: - Gasto mensual en telefonía móvil del Presidente del Gobierno y de cada uno de los ministros en los ejercicios 2012, 2013 y 2014. En caso de que la información no se encuentre tal y como la estoy solicitando, solicito que se me entregue tal y como consta en los registros públicos. Les agradecería que me pudieran remitir la información solicitada en formato accesible (archivo .csv, .txt, .xls o .xlsx). También les recuerdo que disponen de un plazo máximo de un mes para remitir dicha información. Atentamente.”

Con fecha 16 de marzo de 2015 esta solicitud se recibió en la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre para su resolución.

Una vez analizada la solicitud, la Directora de la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración resuelve conceder el acceso a la información a que se refiere la solicitud deducida por [REDACTED] indicándole que la información que solicita ya le ha sido facilitada por los diferentes Ministerios en las resoluciones correspondientes a las solicitudes formuladas con los números 000812; 000942; 000943; 000944; 000945; 000946; 000947; 000948; 000949; 000950; 000951; 000952 y 000953.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial competente (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de notificación de la presente Resolución.

Madrid, 26 de marzo de 2015
DIRECTORA DE LA OFICINA PARA LA
EJECUCIÓN DE LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN

[REDACTED]

Angelina Trigo Portela

[REDACTED]